

EL BIEN PÚBLICO

DIARIO DE LA MAÑANA

ADMINISTRACION E IMPRENTA, CERRITO 84

DIRECTOR—JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN

AVISOS Y SOLICITADAS HASTA LAS 6 DE LA TARDE

Almanaque
Domingo 30—En Pasion. Sr. Juan Clímico y Pastor.
Cuarto creciente a las 9.20 m. de la noche.
Lunas 31, Santos Benjamín y Balbina.
El Sol sale a las 6.11 y se pone a las 5.49

EL BIEN PÚBLICO

MONTEVIDEO, MARZO 30 DE 1879.

A lo Alejandro

Lo que se debe a los maestros por sueldos anteriores a Octubre de 1877, no sé lo que en su momento sabrá, si la Dirección de L. P. ha de pagarlos cuando cubra con exco sus presupuestos actuales.

(Carta del señor don J. P. Varela al Director de la Escuela—Marzo 21 de 1879.)

Ya lo saben los maestros de escuela, que tienen créditos contra el Estado por trabajos profesionales anteriores al mes de Octubre de 1877: la Dirección no sabe nada de eso, tampoco quiere saberlo, y si, por imposible, llegara a cubrir con exco sus presupuestos actuales, antes lo gastaría en dulces para los escolares que en solventar los créditos de sus maestros.

En frente de una declaración tan categórica, lo natural es preguntarse cuáles sean los títulos en cuya virtud han caducado aquellos créditos; o sino han caducado todavía, quienes sean los encargados de solventarlos.

Abriremos las leyes y decretos últimamente promulgados: vemos que se levanta una institución suplantando, en lo relativo a la instrucción pública, a las Juntas Económico-Administrativas; los derechos se transmiten de estas a aquellas, los deberes pasan también mas deslindados, mejor definidos, aumentados en número y hasta en peso. Con los derechos y los deberes, pasan también los dineros y los títulos para exigirlos al pueblo; lo único que no pasa según los intérpretes y ejecutores de esas leyes son las deudas.

Teoría singular, aunque no tanto como la franqueza con que de ella se hace gala.

Abriremos además la Memoria del Ministerio de Gobierno: en ella se relatan con paternal cariño las innovaciones introducidas en la enseñanza pública; las aspiraciones del gobierno al introducir las, las luchas homéricas que la Dirección ha sostenido con pueblos a quienes previamente manifiesta con leyes y reglamentos. Se dice, cierto es, que todo ha sido un nuevo plan, una organización reciente, una violenta reacción contra el pasado, pero no se asegura que la violencia de semejante reacción llegue hasta convertir en despojo de los acreedores de ese pasado. Lo estaba reservado al Sr. Inspector Nacional el declararnoslo, con franqueza digna de mejor ocasión.

El expediente, como se ve, es magnífico, lo único de lamentar, es que no se aplique a los demás centros administrativos. Que cae un gobierno, y ese gobierno corrupto y gastó un empéstito. —Señores acreedores, lo que se les debe a ustedes anteriormente a la fecha en que nosotros empezamos a abonarnos nuestros sueldos, —dirán los nuevos gobernantes,—ni sabemos lo que es, ni nos importa saberlo, ni se lo hemos de pagar a ustedes, aun cuando nos sobre para gastárnoslo en fuegos de Bengala y cohetes voladores. Y el que no lo quiera así, que reviente ó se coma los codos de hambre.

Que la Constitución se reforma y viene una ley de municipalidades, y estas corporaciones se establecen dando de traves con las Juntas Económicas. Pues cátenas Vds. chancelados en un momento todos los créditos pendientes contra las Juntas que cesan.

Que se desgaña una parte de un ministerio u otra cualquier oficina, y con ella se fabrica otra oficina u otro ministerio; pues dénese por satisfechos ó renuncien a cobrar los empleados que de la vieja pasan a la nueva rama del árbol de la Administración, y que la paz y la justicia sean con todos.

Y que hace el Gobierno que no se sude de esos imperpetuosos zánganos llamados interés, amortizaciones, vencimientos, protestando que desde 1.º de marzo ni sabe, ni quiere saber lo que se les debe a los acreedores del Estado, y que en todo caso mejor gastará en arcos el exceso de las rentas, si llega a tenerlo, que tapan la boca, a pedigríos importunos?

La ocasión es calva. [No todos los días está uno en condiciones de dar un formidable tajo que parta en dos las cuestiones difíciles de resolver; y puesto que el Sr. Inspector Nacional está ahora en esa disposición de ánimo, no hay que desperdiciarla: póngasele en la mano un buen montante, y ánimo, nuevo Alejandro; donde no desate, corte, aunque sea a la moral administrativa y al mismísimo sentido común.

Fecundidad sin ruido

Según nos informa *El Siglo* en su número de ayer, un diario extranjero de cuya revista suele prescindir *El Bien Público* se pregunta qué es lo que hacen las actuales Cámaras.

Mas que aquel diario, tienen derecho a interrogarse en ese mismo sentido los señores Representantes y el pueblo mismo cuyos poderes tienen ellos en sus manos.

La época actual mas que ninguna otra se brinda, por la ausencia de pasiones políticas pasadas en fuego, a ser fecundada en grandes medidas para el desarrollo de los intereses económicos del país, que en gran parte dependen de la regularidad y recta distribución en las funciones administrativas.

Un parlamento en las condiciones del nuestro, está expuesto a ser un parlamento sin brillo; porque en la errada manera de ver, habitual ya en los pueblos de nuestra raza, el brillo es compañero del estruendo, como la vida lo es del tumulto y la prosperidad y el engrandecimiento lo son de la fermentación de las pasiones. No se concibe entre nosotros que haya fecundidad sin vértigo, como no se concibe tampoco que haya mérito en la modestia ni virtud en el silencio.

Nuestro deseo sería que el parlamento actual y todos los que le siguieran fuesen tan de poco ruido como de mucha acción; que no constituyeran punca la emoción del día y se perpetuasen sin embargo en la historia; que fueran pacientes y sabios como el labrador que arroja la semilla y se retira a esperar pacientemente el fruto; que se escuchara a cada instante en su recinto la lectura de proyectos como los presentados por los Sres. Reiles y Zorrilla, y sólo muy de tarde en tarde, y si posible fuera nunca, el estallido de la pasión política o el atonito golpear de la piqueta que desnude el pretexto de reforma.

Y en esta parte, es indudable que la Legislatura actual tiene delante de sí un campo vastísimo. De un lado, el estudio de los puntos reformables en la Constitución que es obra para emprendida con intención muy recta y con grandes conocimientos prácticos de nuestras condiciones sociales y teóricas de la ciencia política. Del otro, los incansables reclamos de los pueblos para que se mejoren las condiciones de trabajo, sea con la facilidad de las comunicaciones, sea con la reducción de las cargas públicas y una nivelación prudente de lo que podemos dar con lo que puede exigirse.

Hay que examinar también no las teorías de las escuelas económicas, sino sobre el terreno mismo y a la luz de los resultados las excelencias ó inconvenientes de nuestros sistemas y tarifas de Aduana, de los cuales tanto se duele nuestro comercio y tanto bien dicen aquellos otros que parecen constituir una industria que nace con grandes pretensiones de abrirse paso é invocando para sí todos los cuidados del poder público. Hay que promover en lo posible el desarrollo de la producción especialmente agrícola, no tanto dictando reglamentos al productor, como procurando quitarle embarazos de su camino, y todo esto, cuidando de paso de no aplastar con las piedras que de él quitamos las espaldas de otro productor ó de muchos consumidores.

Todas estas son tareas ávidas y poco gratas al oído de los asistentes a la barra; pero son las únicas sólidas, las únicas que duran, por mas que sean también las únicas que no apasionan; que no procuran aplausos ni vitores, y que no atraen las coronas de un día sobre las frentes de los legisladores.

Por eso cuando sentimos que alguien se duele de que las Legislaturas dejen de ser lugar de cita para los desocupados, sentimos que nuestro ánimo se predispone en favor de ellas.

Eso sí, que nos doliera también mucho en que, por dejar de ser lugar de cita para los desocupados, empezasen a serlo para los soñolientos. La virtud en el justo medio.

¿Cómo será!

Recordarán nuestros lectores la protesta en que nos obligó a prorumpir una célebre reglamentación dispuesta a mediados del pasado mes por la Dirección de L. P.

La idea que entonces lanzamos a los vientos no ha muerto. Ayer se nos ha informado de que en breve los S. S. Directores de escuelas particulares se presentarán ante la Asamblea en vindicación de sus derechos.

Nos felicitamos por ello doblemente: como enemigos del monopolio, en primer lugar, y como iniciadores de la idea, en segundo.

Pero como la reglamentación mencionada es tan monstruosamente despotica, y como nos place hacer resaltar la falta de justicia con que fué aplaudida por diarios que no vacilan en llamarse amantes de las libertades públicas, vamos a consignar aquí el juicio que esa reglamentación le ha merecido a un diario nada sospechoso de obrar y juzgar por preocupaciones de secta como ha dicho el señor Varela que obramos cuantos nos oponemos a su gigantesca idea de absorción.

Ese diario es *L'Italia Nuova* y se expresa así juzgando el último discurso del señor Inspector Nacional.

«Cuál es el ideal del Sr. Varela? «Suprimir la escuela privada en holocausto a la pública; proscribir toda instrucción que no sea la pública.

«Aun cuando las deducciones que se desprenden de los libros, de los discursos, de los actos del Sr. Inspector Nacional ya no lo demostraran, el reglamento dado por él a las escuelas particulares—reglamento que un liberal no habría hecho y que habría avergonzado hasta a un inquisidor—claramente lo demuestra.

Cuando *L'Italia* llega a olvidarse de que en tiempo del Sr. Varela hay escuela

en cuyo estandarte se destacan los signos masónicos, (que no es poco haber) y dice todo eso de la *Reglamentación* y de su autor, cómo será la cosa.

Ecos del otro mundo

La nueva y majestuosa construcción se ha levantado al soplo vivificador de una reforma fecunda.

(Discurso de D. J. P. Varela)

«La Dirección General de L. P. nos olvidó por completo, matando con su ineficaz indiferentismo, el entusiasmo, las buenas disposiciones del mismo pueblo que tanto había concurrido a sus propósitos.

«Este pueblo prestó en un principio su poderosa ayuda, para la instalación de los colegios de la localidad y luego esperó que la D. G. cumpliera con los deberes a su cargo.

«Si él pagaba por la educación de sus hijos, justo era que esa educación fuera una verdad.

«Pero no ha sucedido así.

«Todo se ha reducido a un gran número de programas pomposos, que hasta ahora no se han cumplido acabadamente.»

(El Debate del Carmelo—26 de Marzo de 1879.)

«Parece que la Dirección General de Instrucción Pública hubiera hecho una cuestión de capricho, conservar a nuestra juventud sin el recurso de la instrucción.

Vergüenza nos da decirlo: hacen seis ó mas meses que esta villa no tiene mas que una escuela particular a la que concurren sólo treinta y tantos niños, cuando se cuentan cerca de 200 que esperan el favor de que se les dé lo que tienen derecho a recibir gratuitamente, por que el Departamento paga para ello 8,000 \$ anuales, para dar la *escuela* educación que en la campaña reciben los alumnos de las escuelas públicas.»

(La Epoca—San Francisco—23 Marzo.)

Ya que quiere el señor Varela que le citen nombres propios, le diremos que a don Juan Zubia, preceptor de Castillos, se le debían en Diciembre 11 meses, sea de declaración del mismo señor, hecha en una conversación que tuvimos con él, y que no sabemos que se le haya abonado un centésimo desde entonces, y que a la preceptora de esta Villa, doña Sasturiana Ramos, se le debían otros tantos cuando escribimos.

(La Ley de Rocha—Marzo 27.)

«Algunas mirajas de los miles de cucuruchos de dulces que se han dado a los niños de Montevideo, los sobrantes de los festines que se han celebrado, los 48,000 ejemplares del discurso de don José P. Varela y otros gastos, sino superfluos, inoportunos al menos, teniendo en cuenta la situación aflicta que atraviesa la instrucción de la campaña, no bastarían para abonar 29 meses que se deben a don Antonio Uz, maestro actual del Soldado, y 18 ó 20 que se adeudan a don Miguel Navarro y a doña Agueda Roch, maestros los dos de la villa de Minas.»

(La Unión, Minas, Marzo 28.)

«En el nuevo presupuesto escolar, figura la creación de numerosas escuelas, cuando aún se adeudan muchos meses de sueldo a los profesores de aquí.»

(El Debate, Carmelo, 26 de Marzo.)

REVISTA DE LA PRENSA

El Siglo no contiene editorial.

Lo dice *La Nación* a *La Razón* que su cruzada contra el positivismo va convirtiéndose en campaña contra el sentido común, ni mas ni menos que sus banderas a la religión de nuestro pueblo se trocaban en plagios serviles de libros ni siquiera estimados por los muchos. Dondequiera, también una lluvia de calificativos, muchos de ellos graciosos, tales como: «Filosofos de café reformistas a dedo, Jeremías, puritanos, grandes genios, gente que ensaya sus fuerzas en empezar a profanar las letras, y finalmente corderillos.» —Ea que *La Nación* habla dando contra el ejército, diciendo que en él estaba la causa de la pobreza del Estado, y *La Nación* se ha sentido indignada. El ejército, en efecto, cuesta hoy, y de esto nos hemos ocupado anteriormente, 108,550 pesos mensuales que bajo la administración Ellauri—«No agobian, es sí, los presupuestos de clases pasivas de cuya creación les echó el muerto *La Nación* a los gobiernos principios y no acaban de estrechar los intereses y vencimientos de nuestras deudas que también carga en cuenta *La Nación* y las administraciones anteriores.—De modo que, a juicio de este colega, *La Nación* trata mas que de ilustrar, de *mediatizar* al país.

—Después de este varapalo, *La Nación* echó cáculos sobre el número de obreros que van a ser necesarios para las minas de Cuapirú, conceptos por el colega a la Nueva California.—Da también inserción a una carta del Sr. senador don Carlos Reiles, insistiendo en su proyecto de crear cinco pueblos en la frontera del vecino Imperio, y a la convocatoria para el certamen literario de que ayer nos ocupábamos.

—En sus «Ecos de la Prensa» *La Nación* se arremete a la interpretación violenta que *El Siglo* dió a nuestro artículo del jueves, siendo de notar que *La Nación* lo había interpretado antey de muy diversa manera.

La Colonia responde a los crueles de la Liga Industrial con un trozo del prototipo a la agricultura. Cree el colega que, a parte de la paz pública, ningún otro beneficio se les ha procurado a nuestros agricultores a no ser esperanzas de día en día aplazadas, mientras ellos piden a voz en grito caminos, facilidad para dar salida a sus productos, y primas ó recompensas a sus afanes y esfuerzos.

La *Colonia Española* sigue con su América Española. El colega entra ya por la tierra de las verdades, aunque la rieta un poco con hiel sin duda para no levantar polvo. La *Colonia Española* se halla falta de vínculos que mantengan unido entre los diversos Estados; estos tratan cada cual por su lado, olvidando que tienen intere-

tes comunes, y cuando lo recuerdan, es para establecer una *solidaridad sentimental*, mas bien que la solidaridad de los grandes fines materiales y morales que les son comunes.—*La Colonia* cree que esa solidaridad sentimental se establece siempre contra España, la antigua metrópoli, y no contra los nuevos é inminentes peligros que amenazan a los pueblos hispano americanos.—Una pregunta: ¿quién vendrá todo eso dicho, en la forma y con la oportunidad con que lo dice *La Colonia*?

A *Patria* dedica sus tareas a agradecer las frías bendiciones con que *El Siglo* de Buenos Aires acogió la noticia propalada estos días de que el Emperador del Brasil va a renunciar a la dotación que percibe, en gracia del alivio de sus pueblos. Narra, con esta ocasión *A Patria* rasgos, de munificencia y liberalidad que honran mucho al Emperador, y manifiesta cuánto sería su gusto si viera a los señores argentinos tratar los hombres del Imperio con espíritu de independencia y justicia iguales a las del *Siglo*.

La *Manzanera* en su día *La Reforma* al frente de su artículo editorial. Como el colega ha usado ya tres ó cuatro veces de ese mismo epíteto, nos parece que debiera modificarlo ya diciendo *La Manzanera* en día.

Y nos confirmamos mas en ello viendo que de lo que se trata, según dice *La Reforma*, es de echar abajo el artículo 59 de la Constitución. Animo, pues, y en pie, por tercera ó cuarta vez, la *Manzanera*. Tal vez con la *caída del murillo* se convenga lo que con la vuelta de las razones no se conseguía.

El *Diario del Comercio* prosigue manteniendo al habla a los consumidores con los señores de la Liga.—«Qué ley invocan Vds? preguntan los consumidores. No la del número, por que nosotros como los mas. No la de la justicia, por que no la hayen obligados a pagar raro a los de casa lo que podemos comprar barato al extranjero.

Hace notar que los aranceles al vino son un indicio de que la industria es valiente y se la proteje, no para que haga competencia a otras industrias, sino para que se sostenga y no caiga. Y pregunta donde está el sentido práctico que no haga de ver que el comercio es un intercambio y que si nosotros producimos algo, en pago el extranjero nos compra el nuestro, de modo que no puede decirse que nos arruinan.

El *Telégrafo* Marítimo, por su parte, se solaza contando de *La Epoca* de Madrid la relación de un meeting celebrado por los liberos cambistas arropados de Londres. Pero es el caso que estos señores no están arrepentidos de lo ni reviegan en absoluto del libre-cambio, sino que, según dice expresamente *La Epoca*, en opinión del meeting es conveniente «que medido el sistema del libre-cambio, sin represalias, afecte al desahogado estado que ha llegado la industria en Inglaterra.»—El *Telégrafo* experimenta una viva satisfacción cuando ve esos síntomas inequívocos de que el libre-cambio se va.

—En segundo término le dice de que *El Siglo*, al revisar el *telégrafo* haya torcido los hechos y los conceptos.—«Oh! Y de eso se queja?—Y en último lugar reitera la solicitud que los comerciantes en harinas van a elevar en breve al P. Legislativo. Nos ocupamos de ella en nuestro primer número.

El *Ferre-Carril* da sobre *La Razón* a propósito de militarismo y presuniones militares. Escribe como ya habíamos probado *La Nación* que hay en el ejército mismo que durante la administración Ellauri, y permite además efectuar economías en el presupuesto polí.

SECCION OFICIAL

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, Marzo 29 de 1879.

DECRETO

Después del Gobierno proceder con el mejor acuerdo en la pronta revisión de la Tarifa de Aduanas últimamente formulada, y considerando conveniente al objeto la designación de comisiones especiales para cada uno de los diversos ramos a que corresponden los artículos comprendidos en dicha tarifa.

El Presidente de la República ha acordado y

DECRETO

Art. 1.º Cométese el examen de la Tarifa de Aduanas en los ramos respectivos a los señores comerciantes:
Efectos de tienda.—Sres. Thomson, J. A. Palma y A. W. Wickham.
Almacén.—P. Arcego, Abraham Rodríguez y Oreste Triay.
Mercedería.—Sres. F. Vidella, Benito Reyes y Fernando Grand.

Joyería.—Sres. Carlos S. Mac-Lean, Samuel Bluxen y Victor Carrasco.
Ferretería.—Sres. Diego Mathes, Jaime de la Milla y Antonio Avella.

Objetos navales.—Sres. Luis Bonomi, J. Cassario y Domingo Ratto.
Muebles.—Señores Shaw, B. Caviglia y J. Lens.

Drogas.—Señores L. Yérogui, N. Guillemette y J. U. Ruffig.
Calzado.—Sres. Tomás Sartori y Trillo, Enrique Becker y C. S. Schurenberger.

Los efectos no comprendidos en las designaciones precedentes, se atribuirán al ramo 4.º que por analogía correspondan.

Art. 2.º Las comisiones designadas se expedirán separadamente y al objeto de que este togo lugar y en el mas breve término, puello, el Ministerio de Hacienda fijará de acuerdo con ellas, al instalarse, el número de días que se juzgue indispensable para expedirse.

Art. 3.º Una vez recogidos los informes de las Comisiones Especiales se citará por el Ministerio reunión ó reuniones generales de las mismas, y allí, con asistencia de las vistas de aduana y de la Comisión Especial del Centro Mercantil, procederá el Ministro del ramo 4.º a las modificaciones propuestas que encuentre justas y atendibles.

Art. 4.º Comunicados, publicados y dadas al libro C. L.

LATORRE.

AURELIO BERRIO.

SECRETARIA DEL SENADO

Montevideo, Marzo 29 de 1879.

La Cámara de Senadores se reúne el lunes 31 a las 3 de la tarde para dar cuenta y contestar en primera discusión el reparto adm. 2.º. Aguilera y Leal, Secretario.

SECCION PARLAMENTARIA

Asamblea General

(Continuación)

Lo que se delega es el ejercicio de la soberanía, y esa delegación puede ser mas ó menos amplia, según la forma de gobierno y los fines que la sociedad política se propone alcanzar.

En las repúblicas constitucionales, esa delegación existe de una manera regular y permanente entre nosotros el ejercicio de la soberanía está confiado a los tres altos Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que no es un poder político en el sentido estricto de la palabra, sino que se clasifica entre los poderes públicos.

Si esto es así, muy fácil me parece responder a la cuestión primera, madre, por así decir, de todas las dudas que se agitan, como las de hoy. Si el pueblo el 10 de Marzo hubiese delegado en el Gobierno Provisionario su soberanía, comprendería muy bien que no podía subsistir en ningún Poder Constitucional.

Pero esa delegación era imposible: lo que es posible, es la delegación del ejercicio de la soberanía, y desde entonces el Gobierno Provisionario pudo ocupar una de las ramas del Poder dándole cumplida misión Constitucional a aquella que se conservó constituida.

Y así sucedió. El 10 de Marzo del 76 la asamblea había llegado a su colmo: el Presidente de la República había abandonado su puesto y la Representación Nacional se disolviera con tanta precipitación que ni el tiempo se tomó para firmar sus últimos actos.

En situación todos los intereses, los intereses mas caros del país, estaban amenazados y el mas fuerte é digno tuvo por tanto el derecho de sobreponerse dominando los elementos anárquicos para la salvación común.

El Gobierno Provisionario así surgió ocupando Poderes abandonados, y fué aceptado por el pueblo, teniendo la felicidad de corresponder a una gran parte de las esperanzas que en el se depositaron en el primer momento.

Pero este Gobierno comprendió también desde luego que no podía conseguir su misión sino usaba del Poder en la medida que los sucesos determinaban y lo exigiese el fin que se proponía: la reorganización Constitucional de la República.

Fuó así que respetó siempre y robusteció al Poder Judicial único que se había escapado del naufragio el 10 de Marzo.

Por su Decreto de 21 de Marzo, evidentemente el Gobierno no tuvo otro fin sino reconocer la existencia legal del Superior Tribunal de Justicia.

Ninguna palabra se encuentra en ese documento que confirme el Tribunal—se le supone legalmente constituido.

El Tribunal interpretó ese Decreto como yo lo hago. Pocos días después de aquel en que fué dictado, trató el Tribunal de nombrar Jueces inferiores, se suscitó la duda en su ánimo, si debían proceder también a recompletar los Jueces inferiores que estaban funcionando a pesar de los sucesos que se había producido el 10 de Marzo.

El Tribunal en un acuerdo decidió entonces que no, que esos Jueces habían sido legalmente nombrados, que siendo inamovibles en virtud de una Ley ordinaria, ellos no podían ser destituidos mientras observasen buena conducta; pero por consiguiente en virtud de aquel Decreto solamente podían llenar las vacantes que existían, y los que en adelante se produjesen.

Y así permitirme leer a la Asamblea General los motivos en que ese acuerdo se funda, y que creo de interés para la cuestión que se debate: (Lee lo siguiente):

«Puesta en consideración del Tribunal, la proposición que acaba de hacerse, los señores Camaristas Roldán, Vazquez y Castro, expresaron las opiniones que a este respecto tenían, reunidos en esta forma: Que existiendo y funcionando los Jueces Letrados, existentes en virtud de los respectivos nombramientos hechos por el Tribunal de Justicia en uso de sus facultades legales, no era posible hacer nuevos nombramientos sin destituir a aquellos Jueces ó deponerlos cesantes desde que no se había producido el hecho de la nulidad de dichos Juzgamentos. Que el decreto citado de don G. Gallina al ratificar las atribuciones propias del Tribunal en lo relativo a nombrar Jueces Letrados, no le había conferido atribuciones para proceder a la remoción de los Jueces existentes, tanto por que dicho Decreto no lo expresa, como porque existiendo en perfecta vigencia la Ley de 17 de Julio de 1859 que los da un carácter de inamovibles mientras duren su buena conducta, disponiendo que «su destitución no podrá hacerse sino con causa probada por los trámites y con los recursos establecidos por las Leyes», habría sido necesario que el Gobierno Provisionario hubiese declarado en suspenso, de un modo expreso, los efectos de dicha ley, decretando el mismo la nulidad de la remoción que el Tribunal de Justicia tiene que efectuar en su propia virtud, y que no está en el caso de los Poderes Políticos, creados por circunstancias extraordinarias, y entendiendo los que hablan, que si les fuera permitido separarse de ese camino, la Administración de Justicia se convertiría en un poder irresponsable sujeto constantemente a las oscilaciones que se producen fuera de la dignidad que le es propia.»

«Después de esto, los señores Vazquez y Castro, expresaron las opiniones que a este respecto tenían, reunidos en esta forma: Que existiendo y funcionando los Jueces Letrados, existentes en virtud de los respectivos nombramientos hechos por el Tribunal de Justicia en uso de sus facultades legales, no era posible hacer nuevos nombramientos sin destituir a aquellos Jueces ó deponerlos cesantes desde que no se había producido el hecho de la nulidad de dichos Juzgamentos. Que el decreto citado de don G. Gallina al ratificar las atribuciones propias del Tribunal en lo relativo a nombrar Jueces Letrados, no le había conferido atribuciones para proceder a la remoción de los Jueces existentes, tanto por que dicho Decreto no lo expresa, como porque existiendo en perfecta vigencia la Ley de 17 de Julio de 1859 que los da un carácter de inamovibles mientras duren su buena conducta, disponiendo que «su destitución no podrá hacerse sino con causa probada por los trámites y con los recursos establecidos por las Leyes», habría sido necesario que el Gobierno Provisionario hubiese declarado en suspenso, de un modo expreso, los efectos de dicha ley, decretando el mismo la nulidad de la remoción que el Tribunal de Justicia tiene que efectuar en su propia virtud, y que no está en el caso de los Poderes Políticos, creados por circunstancias extraordinarias, y entendiendo los que hablan, que si les fuera permitido separarse de ese camino, la Administración de Justicia se convertiría en un poder irresponsable sujeto constantemente a las oscilaciones que se producen fuera de la dignidad que le es propia.»

«Después de esto, los señores Vazquez y Castro, expresaron las opiniones que a este respecto tenían, reunidos en esta forma: Que existiendo y funcionando los Jueces Letrados, existentes en virtud de los respectivos nombramientos hechos por el Tribunal de Justicia en uso de sus facultades legales, no era posible hacer nuevos nombramientos sin destituir a aquellos Jueces ó deponerlos cesantes desde que no se había producido el hecho de la nulidad de dichos Juzgamentos. Que el decreto citado de don G. Gallina al ratificar las atribuciones propias del Tribunal en lo relativo a nombrar Jueces Letrados, no le había conferido atribuciones para proceder a la remoción de los Jueces existentes, tanto por que dicho Decreto no lo expresa, como porque existiendo en perfecta vigencia la Ley de 17 de Julio de 1859 que los da un carácter de inamovibles mientras duren su buena conducta, disponiendo que «su destitución no podrá hacerse sino con causa probada por los trámites y con los recursos establecidos por las Leyes», habría sido necesario que el Gobierno Provisionario hubiese declarado en suspenso, de un modo expreso, los efectos de dicha ley, decretando el mismo la nulidad de la remoción que el Tribunal de Justicia tiene que efectuar en su propia virtud, y que no está en el caso de los Poderes Políticos, creados por circunstancias extraordinarias, y entendiendo los que hablan, que si les fuera permitido separarse de ese camino, la Administración de Justicia se convertiría en un poder irresponsable sujeto constantemente a las oscilaciones que se producen fuera de la dignidad que le es propia.»

«Después de esto, los señores Vazquez y Castro, expresaron las opiniones que a este respecto tenían, reunidos en esta forma: Que existiendo y funcionando los Jueces Letrados, existentes en virtud de los respectivos nombramientos hechos por el Tribunal de Justicia en uso de sus facultades legales, no era posible hacer nuevos nombramientos sin destituir a aquellos Jueces ó deponerlos cesantes desde que no se había producido el hecho de la nulidad de dichos Juzgamentos. Que el decreto citado de don G. Gallina al ratificar las atribuciones propias del Tribunal en lo relativo a nombrar Jueces Letrados, no le había conferido atribuciones para proceder a la remoción de los Jueces existentes, tanto por que dicho Decreto no lo expresa, como porque existiendo en perfecta vigencia la Ley de 17 de Julio de 1859 que los da un carácter de inamovibles mientras duren su buena conducta, disponiendo que «su destitución no podrá hacerse sino con causa probada por los trámites y con los recursos establecidos por las Leyes», habría sido necesario que el Gobierno Provisionario hubiese declarado en suspenso, de un modo expreso, los efectos de dicha ley, decretando el mismo la nulidad de la remoción que el Tribunal de Justicia tiene que efectuar en su propia virtud, y que no está en el caso de los Poderes Políticos, creados por circunstancias extraordinarias, y entendiendo los que hablan, que si les fuera permitido separarse de ese camino, la Administración de Justicia se convertiría en un poder irresponsable sujeto constantemente a las oscilaciones que se producen fuera de la dignidad que le es propia.»

«Después de esto, los señores Vazquez y Castro, expresaron las opiniones que a este respecto tenían, reunidos en esta forma: Que existiendo y funcionando los Jueces Letrados, existentes en virtud de los respectivos nombramientos hechos por el Tribunal de Justicia en uso de sus facultades legales, no era posible hacer nuevos nombramientos sin destituir a aquellos Jueces ó deponerlos cesantes desde que no se había producido el hecho de la nulidad de dichos Juzgamentos. Que el decreto citado de don G. Gallina al ratificar las atribuciones propias del Tribunal en lo relativo a nombrar Jueces Letrados, no le había conferido atribuciones para proceder a la remoción de los Jueces existentes, tanto por que dicho Decreto no lo expresa, como porque existiendo en perfecta vigencia la Ley de 17 de Julio de 1859 que los da un carácter de inamovibles mientras duren su buena conducta, disponiendo que «su destitución no podrá hacerse sino con causa probada por los trámites y con los recursos establecidos por las Leyes», habría sido necesario que el Gobierno Provisionario hubiese declarado en suspenso, de un modo expreso, los efectos de dicha ley, decretando el mismo la nulidad de la remoción que el Tribunal de Justicia tiene que efectuar en su propia virtud, y que no está en el caso de los Poderes Políticos, creados por circunstancias extraordinarias, y entendiendo los que hablan, que si les fuera permitido separarse de ese camino, la Administración de Justicia se convertiría en un poder irresponsable sujeto constantemente a las oscilaciones que se producen fuera de la dignidad que le es propia.»

«Después de esto, los señores Vazquez y Castro, expresaron las opiniones que a este respecto tenían, reunidos en esta forma: Que existiendo y funcionando los Jueces Letrados, existentes en virtud de los respectivos nombramientos hechos por el Tribunal de Justicia en uso de sus facultades legales, no era posible hacer nuevos nombramientos sin destituir a aquellos Jueces ó deponerlos cesantes desde que no se había producido el hecho de la nulidad de dichos Juzgamentos. Que el decreto citado de don G. Gallina al ratificar las atribuciones propias del Tribunal en lo relativo a nombrar Jueces Letrados, no le había conferido atribuciones para proceder a la remoción de los Jueces existentes, tanto por que dicho Decreto no lo expresa

